



**Defensoría del Pueblo de la Nación**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** RESOLUCIÓN N° 00063/23 - ACTUACIONES N° 1556/20 y N° 1559/20 - [REDACTED]  
[REDACTED] s/presunta demora en el trámite de expedientes  
por parte de la Secr. de D.H - DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS / MJyDH.

---

VISTO las Actuaciones N° 1556/20 y N° 1559/20, caratuladas: [REDACTED] sobre  
presunta demora en el trámite de expedientes por parte de la Secretaría de Derechos humanos" y [REDACTED]  
[REDACTED] sobre presunta demora en el trámite de expedientes por parte de la Secretaría de  
Derechos Humanos"; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el señor [REDACTED] requirió la intervención de esta Defensoría del Pueblo  
ante la demora por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en resolver tanto su  
solicitud de reparación como el de su hermana, [REDACTED] registradas bajo EXP-  
S04:0003611/16 y EXP-S04:0003612/16.

Que, requerida la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE POLÍTICAS REPARATORIAS, brindó respuesta mediante  
correo electrónicos del 15/10/2020 haciendo saber que en ambos expedientes se realizó Informe Técnico de  
carácter negativo y se aconsejó rechazar la petición.

Que, luego la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN mediante Nota N° NO-2021-86447374-APN-  
DGA#MJ informó que se remitió el proyecto de resolución a la firma del Sr. Ministro, en ambos expedientes.

Que, posteriormente, los expedientes EXP-S04:0003611/16 y EXP-S04:0003612/16 volvieron a la DIRECCIÓN  
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ingresando a dicha dependencia el 22/10/23 y el 25/11/2021  
respectivamente, según surge de la Consulta de Expedientes de la página web del MJyDH.

Que, a fin de conocer el avance de los expedientes citados, se cursaron requerimientos a la DIRECCIÓN  
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS mediante Notas NO-2021-00020851-DPN-SECGRAL#DPN, del  
13/12/21, NO-2022-00004584-DPN-SECGRAL#DPN, del 28/02/22 y NO-2023-00027310-DPN-  
SECGRAL#DPN, del 16/04/23, las cuales no han sido respondidas.

Que, en razón de ello, se realizaron diversas gestiones oficiosas para obtener respuesta y para conocer sobre  
la posibilidad de que se adopte una decisión en la esfera de competencia de la mencionada DGAJ, sin  
resultado favorable.

Que, en la actualidad, de la Consulta de Expedientes de la página web del MJyDH surge que los expediente  
EXP-S04:0003611/16 y EXP-S04:0003612/16 aún continúan en la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

## JURÍDICOS.

Que, como se expresara en otras resoluciones libradas por esta Defensoría, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, examina los elementos probatorios obtenidos y los extremos jurídicos obrantes en el expediente y, como consecuencia de ello, emite una opinión al respecto.

Que, esa tarea -importante- no puede extenderse en el tiempo sin un justificativo razonable que no se observa en el presente caso.

Que, el prolongado tiempo transcurrido de más de un año sin haber realizado el citado pronunciamiento, atenta contra una política efectiva de reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como ya ha señalado esta Defensoría en oportunidad de formular recomendación al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS mediante Resolución N° 123/19, como así también contradice el contenido del derecho a peticionar y su ejercicio efectivo.

Que, en esa línea, el artículo XXIV de la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, la cual posee jerarquía constitucional, expresa que: “toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Asimismo, el derecho de peticionar a las autoridades se encuentra contemplado expresamente en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. En ese marco, los art. 1º, inc f) y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 establecen el derecho a una decisión fundada.

Que, como es sabido, el derecho a peticionar ante las autoridades consiste en el derecho a reclamar, demandar o solicitar a los órganos con función administrativa una conducta u omisión concreta y tiene como correlato el deber de la Administración de dar respuesta cierta y oportuna a tales peticiones.

Que, el procedimiento administrativo, como toda actividad del Estado, exige el pleno sometimiento de este al principio de juridicidad y debe desarrollarse respetando los principios generales del Derecho Administrativo: legalidad, oficialidad, debido proceso, rapidez y economía (Gordillo, 2016).

Que, cabe recordar, la copiosa opinión doctrinaria que señala en forma unánime los alcances de las normas citadas en cuanto a que la administración pública tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares, a saber: MARIENHOFF, Tratado de derecho administrativo, t. I, p. 735; DIEZ, Derecho Administrativo, t. II, p. 250; SAYAGUES LASO, Tratado de Derecho Administrativo, t. I, p. 435; ROYO VILANOVA, Elementos de Derecho Administrativo, t. I, p. 108; citados en: Amparo por Mora de la Administración Pública; CREO BAY, Horacio D. y HUTCHINSON, Tomás; Ed. Astrea, ed. 2006, pág. 3.

Que, además, la doctrina constitucional ha expresado que “cuando la petición se radica ante órganos de la administración pública por los administrados, entendemos que el órgano requerido debe contestar la petición, o sea, emanar una relación acerca de la pretensión incoada en la petición. En tal hipótesis, si la administración no estuviera obligada a pronunciarse, el derecho de peticionar carecería de sentido” [Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino; Tomo I B; BIDART CAMPOS, Germán J.; Ed. Ediar, ed. 2001, pág. 195].

Que, ello, sin perjuicio de señalar que los crímenes de lesa humanidad son graves violaciones a los derechos humanos. En ese marco, la obligación estatal de investigar, juzgar, sancionar y reparar estas violaciones, se encuentran plasmados en distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional como ser la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (cf. artículos 1.1 y 8), el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (artículos 2 y 14.1), la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (artículos 1, 4, 6 y 9) y la CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (artículos 4 y 5).

Que, los compromisos del Estado dirigidos a asegurar justicia por las graves violaciones a los derechos humanos exigen que las políticas y acciones que se emprendan se centren en los derechos de las víctimas a la tutela judicial efectiva, en los recursos y las reparaciones (8 y 25 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS).

Que, las denominadas "Leyes Reparatorias" (Nros. 24.043, 24.321, 24.411, 25.914, 26.564 y 26.913), forman parte de las distintas políticas públicas llevadas adelante por el Estado desde el advenimiento de la democracia, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales consistentes en plasmar "la reparación económica integral de las víctimas del terrorismo de Estado", entre otras tantas medidas.

Que, el artículo 86 de la Constitución Nacional dispone que es misión del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por aquélla y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración.

Que, en consecuencia, resulta necesario recomendar al DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN que adopte las medidas necesarias a efectos de emitir una decisión en los Expedientes N° EXP-S04:0003611/16 y N° EXP-S04:0003612/16, cuyos titulares son [REDACTED] en el marco de las competencias de esa Oficina, para la prosecución del expediente citado.

Que, la presente se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución Nacional y la ley 24.284, modificada por la Ley 24.379, la autorización conferida por los señores Presidentes de los bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N° 1/2014, del 23 de abril de 2014, y la notificación del 25 de agosto de 2015, que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General en la persona del Subsecretario, para el supuesto de licencia o ausencia del primero.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO GENERAL A/C

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Recomendar al DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN que adopte las medidas necesarias a efectos de emitir una decisión en los Expedientes N° EXP-S04:0003611/16 y N° EXP-S04:0003612/16, cuyos titulares son [REDACTED] en el marco de las competencias de esa Oficina, para la prosecución de los expedientes citados.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifíquese y resérvese.

RESOLUCIÓN N° 00063/23.-